

Costa Rica
7 de Febrero de 2010
Laura Chinchilla (2010- 2014)

MEDIOS Y ELECCIONES EN COSTA RICA

Además de darle cobertura a aspectos como la organización electoral y las propuestas de gobierno, la prensa costarricense se metió de lleno en el origen de los recursos que financiaban las campañas masivas y la logística de los partidos políticos para las elecciones nacionales del 2010. El ejercicio periodístico sacó a flote diversas polémicas en torno al dinero electoral.

Esteban Oviedo Álvarez
oviedo.esteban@gmail.com

Periodista del diario La Nación de Costa Rica desde el año 2002, donde ha laborado en las secciones de Sociedad y Servicios, Investigación y Política. Antes de esa fecha, laboró en medios como El Heraldo, La República y Radio América. Estudió Periodismo en el Colegio Universitario San Judas Tadeo de la Universidad Federada de Costa Rica. En esa misma institución, imparte clases de Periodismo Interpretativo desde el año 2007.

Resumen

Costa Rica enfrentó las elecciones del 2010 con nuevas reglas electorales. Un semestre antes de las votaciones, el Congreso aprobó una reforma cuyo principal objetivo era evitar que dinero de dudosa procedencia financiara a los partidos políticos y comprometiera a los futuros gobernantes.

La reforma fue impulsada luego de que, en los comicios del 2002, se destapara la existencia de donaciones secretas provenientes de empresas extranjeras y nacionales, las cuales violaron casi toda la legislación vigente en ese momento.

Debido a esos hallazgos, para finales de la primera década del siglo XXI, se prohibieron las donaciones de sociedades anónimas y se introdujo la figura del financiamiento estatal adelantado para los políticos, pero con aportes todavía muy bajos.

Con esas nuevas reglas, era una incógnita cómo financiarían los partidos políticos sus campañas, luego de años estar acostumbrados a nutrirse con donaciones privadas.

Los medios de comunicación, principalmente los escritos, jugaron entonces un papel determinante en el desarrollo de la campaña electoral del 2010.

Los medios no se limitaron a informar sobre propuestas de gobierno y organización electoral, sino que pusieron la mira en el financiamiento de los partidos y profundizaron en ese tema.

El dinero de campaña sobresalió en una cantidad importante de planas. De esa manera, los electores tuvieron al alcance información sobre el origen de los recursos que respaldaban a las opciones electorales que se le presentaban en la publicidad.

Una expropietaria de un centro de estética figuró como financista de uno de los principales partidos; un banco estatal fue cuestionado por negarle crédito a varias agrupaciones; un portillo permitió el aporte de las empresas privadas. Esos fueron algunos de los hechos que la prensa dio a conocer durante una intensa campaña.

El panorama electoral: las fuerzas políticas más importantes

Para las elecciones nacionales del 2010, se postularon nueve candidatos presidenciales. Según las encuestas de intención de voto, tres de ellos tenían las mayores posibilidades de llegar a la Casa Presidencial.

Una de esas opciones era Laura Chinchilla Miranda, exvicepresidenta del gobierno saliente y candidata por el Partido Liberación Nacional (PLN), que ejerció el poder en el período 2006-2010.

Chinchilla venía de ganar, en junio del 2009, la convención del PLN por un amplio margen. La también exdiputada triunfó en una elección interna que convocó a más de 500.000 personas en un país con un padrón electoral de 2,8 millones de votantes.

Ella representaba la opción de darle continuidad a la administración del entonces presidente, Óscar Arias Sánchez, con lo que el PLN (centro derecha) se asomaba a la posibilidad de permanecer ocho años seguidos en el poder.

Arias dedicó gran parte de su administración a impulsar la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que generó un amplio debate en Costa Rica.

Laura Chinchilla enfatizó su campaña electoral en terminar de construir programas de asistencia social impulsados por su antecesor, como una red de cuidado infantil y becas condicionadas para estudiantes de bajos recursos.

Otra figura era Ottón Solís Fallas, un exministro de Arias en los años 80 y exintendente del PLN que revolucionó la política costarricense, en el 2002.

Solís salió de Liberación alegando que ese partido estaba “enfermo” y fundó el Partido Acción Ciudadana (PAC), una agrupación de centroizquierda que, con pocos recursos, alcanzó grandes resultados electorales en las dos campañas anteriores.

En el 2002, El PAC obtuvo más de un 20% de los votos y, aunque quedó fuera, obligó a una segunda ronda entre los partidos mayoritarios que formaban el extinto bipartidismo: el PLN y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Luego, en el 2006, el exdiputado Solís estuvo muy cerca de ganarle la presidencia a Óscar Arias, el cual ganó por pocos votos.

En tercer lugar, para la elección del 2010 se presentaba Otto Guevara Guth, candidato del Movimiento Libertario, una agrupación que nació a finales de la década de los 90 como la representación de la extrema derecha.

Guevara fue un diputado muy popular, destacado por defender los ideales de su partido, aunque, en esta ocasión, matizó su discurso en pos de la presidencia.

Por ejemplo, el Libertario antes rechazaba la contribución estatal para financiar sus gastos electorales, pero, en el 2010, la aceptó y aspiró a ella en forma abundante.

En sus orígenes, este partido abogaba por la reducción del Estado, así como la eliminación de impuestos, de la seguridad social y de la educación pública. Incluso, en su manifiesto original, llegó a decir que el narcotráfico era un delito sin víctimas.

Para los comicios del 2010, Guevara irrumpió con una campaña temprana que consistió en la difusión de mensajes masivos desde un año antes de la contienda electoral, a fin de ganar terreno.

Así, el abogado y exdiputado defendió los programas sociales del Estado, además de anunciarse como la “mano dura” contra el crimen.

Aunque en la elección del 2006 apenas había alcanzado el 8% de los votos, la campaña temprana permitió a Guevara posicionarse para el 2010 como un candidato importante en las encuestas, con posibilidades de forzar a una segunda ronda electoral y convertirse en presidente.

El dinero electoral en la mira

En agosto del 2009, el congreso costarricense aprobó una reforma a la legislación electoral, la cual introdujo cambios importantes en las reglas de las campañas políticas, sobre todo en los aspectos relacionados con el sistema de financiamiento para los partidos.

El nuevo Código Electoral prohibió las donaciones provenientes de sociedades anónimas, las cuales constituyeron, durante décadas, una de las principales fuentes de financiamiento para las agrupaciones políticas.

La reforma mantuvo el impedimento para que extranjeros aportasen dinero en estos procesos y, en cambio, le quitó el tope a las donaciones que pueden hacer las personas físicas, de manera que estas pudiesen aportar libremente a los partidos.

Dichos cambios intentaban cerrarle la puerta a hechos como los ocurridos en la elección del 2002. En aquella época, trascendió que las campañas de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) fueron financiadas, en parte, con donaciones secretas al margen de las reglas.

Durante esa campaña, el PUSC creó una estructura paralela para recaudar donaciones no permitidas por la legislación electoral (*La Nación*, 14 de diciembre del 2003). De esa manera, recibió abundantes contribuciones de empresas extranjeras y costarricenses, sin que estas fuesen reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La Unidad Social Cristiana, que ganó esos comicios en la segunda ronda, recibió \$1,5 millones al margen del sistema oficial, según trascendió en ese momento (*La Nación*, 14 de diciembre del 2003). De esa cifra, \$500.000 provinieron de Taiwán y \$139.000 de Suiza.

Investigaciones periodísticas y legislativas revelaron que estos partidos mayoritarios violaron casi todas las reglas que regían el control de las contribuciones en ese entonces, lo que comprometía el quehacer político.

Algunas donaciones paralelas de empresas nacionales y extranjeras superaron hasta en 7,7 veces el monto máximo permitido por la ley en ese momento.

Para recibir esas contribuciones, el PUSC manejó una cuenta en Costa Rica y otra en Panamá. Esta última fue la que recibió donaciones desde cuentas en Suiza y Taiwán por un total de \$639.000.

En el caso del PLN, los dirigentes de la campaña admitieron haber recibido un cheque por \$25.000 de un empresario panameño, relacionado con el sector de tiendas libres de impuestos en aeropuertos. Ellos alegaron que ese dinero se gastó en “regalos navideños”.

Pese al escándalo, el Ministerio Público no acusó a los dirigentes partidarios al alegar que el Código Electoral vigente, en ese momento, tenía errores técnico jurídicos, porque establecía que los responsables de los dineros de campaña eran los partidos políticos y las demandas penales solo pueden ser presentadas contra personas físicas.

Todavía en julio del 2010, trascendió que la firma de telecomunicaciones, Alcatel Cit, aparentemente le entregó \$100.000 tanto al PUSC como al PLN para esa misma campaña del 2002.

El asunto fue ventilado en el juicio que se debate en Costa Rica por las presuntas dádivas que Alcatel entregó a altos funcionarios costarricenses para ganar contratos de telefonía en una empresa estatal (*La Nación*, 8 de julio del 2010).

La reforma electoral del 2010 trató de establecer estrictas pautas para hacerse de recursos en una campaña electoral. Con los cambios que introdujo, la puerta quedó cerrada para las billeteras de las personas jurídicas.

Sin embargo, quedaba pendiente observar cómo se comportarían los donantes de campaña, al tomar en cuenta que a la mayoría no le gusta que sus nombres aparezcan en registros de contribuyentes con grandes montos de dinero en el renglón de a la par.

Siempre dentro del campo del financiamiento, la reforma electoral también redujo el monto que el Estado aportaría para financiar los gastos de campaña de un 0,19% a un 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB). En dólares, la cifra bajó de \$75 millones a \$43 millones.

Además, se introdujo la figura del financiamiento anticipado, aunque con montos todavía muy bajos. Esto significa que antes de las elecciones los partidos podrían obtener una porción de la contribución estatal a los gastos electorales.

Para ello, el TSE repartiría por partes iguales un 15% del aporte reservado por el Estado entre los partidos que rindieran una garantía, la cual podría ser rematada en caso de que no obtuvieran los votos suficientes.

Igualmente, se introdujo la obligación de que los partidos presentaran sus liquidaciones de gastos de campaña con la revisión y la fe pública de un contador público autorizado, al tiempo que, por primera vez, se ordenó al Estado financiar las campañas de elección municipal con un 0,03% del PIB (la cifra fue de unos \$9,2 millones para diciembre del 2010).

En otros apartados, se estableció la obligatoriedad de alternar géneros (femenino y masculino) en las papeletas para puestos de elección popular y se establecieron las reglas para que los costarricenses que viven en el extranjero pudiesen votar.

Donaciones, al destierro

Este conjunto de reformas prácticamente provocó el destierro de las altas donaciones privadas a las campañas, tanto de personas jurídicas como físicas. En el primero de los casos, estas ya no eran permitidas y, en el segundo, las contribuciones no superaron los \$16.000 por persona en la campaña nacional del 2010.

En consecuencia, los partidos mayoritarios se decantaron por el sistema de bonos de deuda política para financiar sus gastos electorales, un sistema existente desde antes de la reforma.

Los bonos son certificados emitidos por los partidos políticos, los cuales constituyen una expectativa de pago en favor de terceros respaldados por el Código Electoral. Estos se hacen efectivos según el resultado de las votaciones.

Dicho de otra forma, son un compromiso de pagar dinero o servicios en forma posterior, siempre que el resultado electoral le alcance al partido para acceder a cierta porción de la contribución estatal.

Los bonos de deuda política son usados de tres formas. En una, se entregan como garantía a entidades bancarias para que estas faciliten dinero. Usualmente, los bancos se aseguran de tener una cantidad de bonos superior a la cantidad de recursos que entregan, como respaldo.

En otra, se les ceden a proveedores como pago por servicios y, en la tercera, se conceden cuando una persona entrega dinero en efectivo con la esperanza de que recuperará el dinero con intereses incluidos.

Incluso, en esta última modalidad se puede obtener una ganancia si el partido le hace un descuento al comprador del bono.

Por ejemplo, si una persona entrega \$85.000, el partido le puede dar bonos por \$100.000 para que se gane la diferencia cuando se haga efectiva la contribución estatal en caso de que el resultado electoral fue suficiente.

Los bonos se hacen válidos según el número de votos que obtenga cada partido, así como la comprobación que hace el TSE para verificar que sus gastos electorales fueron reales y razonables.

Con este panorama, al alero de las nuevas reglas electorales, los bancos se constituyeron en los principales financistas de campaña y, para ello, se apoyaron en los bonos de deuda política.

A su vez, surgieron algunos compradores de bonos que aportaron dinero en efectivo y empresas que recibieron los certificados como medio de pago para servicios como publicidad o transporte.

Sin embargo, también surgieron inusuales formas de financiamiento que permitieron a algunos partidos obtener recursos para su proselitismo.

El financiamiento acaparó planas

El tema del financiamiento electoral acaparó buena parte de las agendas en los principales medios de comunicación.

Si bien la discusión de propuestas de gobierno y la organización electoral estuvieron presentes en los medios durante la campaña que precedió a febrero del 2010, esos temas no fueron tan estelares como ocurrió en ocasiones anteriores.

Un hecho que pudo incidir consistió en que, durante el 2007, el país vivió un fuerte debate de políticas públicas en torno al referendo para decidir si Costa Rica integraría

el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC).

La discusión sobre el TLC fue intensa y permitió debatir temas de alta importancia en áreas como el comercio, los tributos y los monopolios.

Finalmente, el 7 de octubre, el Tratado fue aprobado en una cerrada votación.

Poco más de dos años después, para el inicio de la campaña con miras a la elección nacional, los medios de comunicación pusieron una especial atención sobre cómo hacían los partidos políticos para financiar sus mensajes masivos.

Los medios, principalmente los escritos, se constituyeron en fiscalizadores del proceso de recaudación de fondos, de acuerdo con las reformas electorales introducidas en los albores del proceso y con las irregularidades del 2002 en la memoria.

En mayo del 2009, aún antes de la reforma electoral, la prensa ya tenía la mira puesta en el tema. En ese entonces, no estaban prohibidas las donaciones de sociedades anónimas.

El 16 de mayo, por ejemplo, el periódico *Al Día* dio cuenta de que el Partido Liberación Nacional era el que más contribuciones captaba, seguido de los opositores Acción Ciudadana y Movimiento Libertario.

Sin embargo, la prohibición sobre las donaciones de sociedades anónimas cambió todo el panorama, así como la campaña temprana introducida por el derechista Movimiento Libertario mediante la difusión de mensajes electorales desde el primer semestre del 2009, en momentos en que el PLN y el PAC apenas hacían sus convenciones internas.

Los bonos, un disfraz y las listas negras en los bancos

Con la puerta cerrada al dinero de las sociedades anónimas, así como un adelanto de deuda política muy bajo, era un dilema ver cómo harían los partidos para financiar sus costosas campañas.

A principios de agosto, el periódico *La Nación*, uno de los más influyentes, advirtió que las agrupaciones se apoyarían en el sistema de los bonos de deuda política.

Los partidos planeaban emitir bonos por unos \$41 millones, informó dicho diario el 5 de agosto.

Sin embargo, el periódico puso en la palestra otro tema. ¿Podrían los bonos convertirse en un disfraz para recibir donaciones de sociedades anónimas, las cuales fueron prohibidas por el Congreso para evitar actos como los ocurridos en el 2002 cuando empresas extranjeras introdujeron dinero?

La razón de esa preocupación estaba al alcance de la vista: los diputados que aprobaron la reforma prohibieron las donaciones de empresas, pero no prohibieron que las personas jurídicas comprasen bonos de deuda política.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que analizaría si el sistema de bonos serviría de careta.

En setiembre, trascendió que el Tribunal de Elecciones decidió autorizar la compra de bonos por parte de sociedades anónimas.

En criterio de *La Nación*, el TSE abrió el portillo para encubrir las donaciones que se pretendieron evitar con la reforma electoral (*La Nación*, 18 de setiembre del 2009).

Los magistrados argumentaron que la compra de bonos no es una donación, sino una inversión. Aún así, el órgano electoral reconoció que “podrían existir situaciones extremas en las que se encubran donaciones”.

En forma paralela, los medios informaron acerca de las dificultades que enfrentaban los partidos para conseguir dinero.

Al tener el sistema de bonos como su principal herramienta, las agrupaciones optaron por buscar créditos bancarios para pagar sus mensajes publicitarios y otros gastos, los cuales respaldarían con certificados de deuda política.

Los bancos tenían que aceptar, como garantía, unos bonos cuyo valor dependía del resultado que saquen los partidos en las elecciones.

Adicionalmente, los grupos políticos no gozaban de buenas referencias en los bancos, pues tenían bajas calificaciones como clientes bancarios debido a situaciones anteriores.

Días después, el presidente del TSE, el magistrado Luis Antonio Sobrado, argumentó ante la opinión pública que lo que estaba pasando con el financiamiento electoral fue consecuencia de decisiones políticas tomadas en el Congreso, pues el Tribunal propuso una reforma muy diferente (Diario Extra, 23 de setiembre).

Según Sobrado, en el 2001, el Tribunal propuso al Poder Legislativo suprimir el sistema de bonos partidarios y ofrecer, de parte del Estado a los partidos políticos, un adelanto de deuda política más generoso, así como un monto no reembolsable para pagar mensajes publicitarios.

El presidente del TSE fue del criterio de que el sistema de bonos incurre en desigualdad, pues los bancos prestan dinero según los porcentajes obtenidos por las agrupaciones en las encuestas.

Para finales de setiembre, el *Diario Extra* tocó el tema de que los partidos estaban en las “listas negras” de los bancos, debido a deudas de campañas pasadas, lo que complicaba sus posibilidades de obtener recursos.

Difusión de nuevas medidas

Los medios escritos también le dieron espacio a temas relacionados con las nuevas herramientas que otorgaba la legislación electoral, así como sus defectos.

Se informó sobre la reforma que obligó a los bancos a reportar operaciones sospechosas en cuanto al financiamiento partidario, al igual que ocurre con el control contra el lavado de dinero (*La Nación*, 7 de octubre).

Con la reforma, los bancos se exponían a multas superiores a los \$2.000 si no reportaban una operación sospechosa.

Además, un nuevo reglamento permitiría al Tribunal Supremo de Elecciones esculcar las cuentas de los partidos, los cuales ahora estaban obligados a llevar la contabilidad completa de sus movimientos y a someterla a un auditor, así como a operar con una cuenta bancaria única (*La Nación y la Prensa Libre*, 21 de octubre).

Al igual que esos, otros puntos importantes fueron tocados en el debate público. Por ejemplo, se dejó al descubierto que nada impedía a los partidos morosos con la seguridad social acceder a los recursos de la deuda política adelantada (*Diario Extra*, 26 de octubre).

Financiamiento adelantado, eco de críticas

La forma en que se otorgó el financiamiento adelantado también ocupó importantes espacios en los medios escritos y se le dio eco a las quejas de algunos partidos sobre los inconvenientes para obtener ese dinero.

El PAC alzó la voz al apuntar que no era fácil obtener una garantía en favor del Estado en una entidad bancaria si lo único que se tenía para respaldarla eran bonos (*La Nación*, 27 de octubre).

Esa situación provocó que algunos grupos pusieran terrenos o vehículos a responder para acceder a un adelanto que rondaría una cifra de \$450.000 por agrupación (*La Prensa Libre*, 30 de octubre).

El mismo día, *Diario Extra* dejó en claro que para acceder a esos recursos los partidos debían cumplir con la publicación de una lista de donantes en un medio de comunicación.

Incluso, el 3 de noviembre, *La Prensa Libre* editorializó sobre el tema del financiamiento adelantado.

“Esta decisión es acertada porque permite a los partidos políticos asegurarse dinero para establecer una campaña electoral básica. Lo fundamental es que nadie tenga que arrancar de cero”, dijo la sección editorial del diario.

Pero, luego advirtió: “Un sector que suele verse sacrificado, por cierto, es el de los medios de comunicación que, muchas veces, no puede cobrar los contratos de publicidad suscritos con los partidos políticos. Pero, al mismo tiempo, los medios seremos blanco permanente de críticas, porque hay quienes ven en el acceso diferenciado a la propaganda política, una situación de discriminación de parte de los medios, más que de responsabilidad y compromiso de parte de los partidos políticos”.

En criterio del editorial de *La Prensa Libre*, la reforma electoral dejó amplios “espacios grises” en el tema del financiamiento.

Eugenio Trejos, candidato presidencial del Frente Amplio, también opinó que la cantidad de dinero adelantado a cada uno de los partidos provocara que existieran candidatos de primera y de segunda categoría. “Para llegar a hacer campaña electoral se requiere de millones y millones de colones que muchas veces no sabemos ni de dónde proceden”, dijo el político (*Radio Reloj*, 5 de enero del 2010).

Empiezan a fluir los bonos

A finales de noviembre del 2010, tres meses antes de las elecciones, los medios escritos dieron cuenta de que los recursos empezaron a caer en las cuentas de los partidos, cuando los bancos accedieron a otorgar créditos con base en bonos, aunque no sin dificultades.

“Pasaron congojas como cualquier cliente para conseguir un préstamo bancario”, dijo *La Nación* el 20 de noviembre, al tiempo que indicaba que el PLN colocó casi \$14 millones en diversos bancos y el PAC, aunque quería disponer de \$10 millones, no logró alcanzar los \$6 millones.

El Movimiento Libertario, por su parte, hizo emisiones por casi \$10 millones.

El PLN acudió a créditos de bancos como Lafise, Banco de Costa Rica (BCR), Promérica y Cathay; el PAC tocó las puertas en el BCR, Lafise y BCT; mientras que el Libertario se financió con Lafise, BCT y Financiera Acobo (reporte del departamento de Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones).

En tanto, las donaciones de personas físicas eran risibles en comparación con las contribuciones recibidas de parte de sociedades anónimas en el pasado. Por ejemplo, para finales de noviembre, la donación mayor fue de \$16.000 (La República, 20 de noviembre).

“Los partidos echan de menos las donaciones de empresas”, tituló *La Nación* el 13 de diciembre al corroborar que muchos contribuyentes optaban por no aportar dinero si su nombre aparecería en listas públicas.

Entre octubre y noviembre, los dos primeros meses de la campaña nacional, el PLN había recibido \$65.000 en donaciones de personas físicas, mientras que en los dos primeros meses de la precampaña para su convención interna (antes de la reforma electoral), había recibido \$680.000 de parte de sociedades anónimas.

Mientras los partidos tocaban las puertas de los bancos y sorteaban dificultades, los medios también reportaban que el TSE encontraba inconsistencias en los primeros informes contables de los partidos (*La Prensa Libre*, 9 de diciembre).

Empieza la guerra por el dinero

En medio de la incertidumbre por el comportamiento de las nuevas reglas de financiamiento, empezaron a publicarse cuestionamientos tanto a partidos como a bancos.

Trascendió que el Movimiento Libertario había financiado su campaña temprana con préstamos hipotecarios gestionados por su propio candidato, Otto Guevara, quien firmó escrituras con diversas sociedades y puso terrenos de su propiedad a responder (*Diario Extra*, 15 de diciembre del 2009).

De esa manera, el Libertario obtuvo \$683.000, lo que despertó los ataques y cuestionamientos por parte del PLN.

Parte de ese dinero fue prestado por una empresaria que había sido maestra de profesión y propietaria de un centro de estética.

El Movimiento Libertario insistía en que, para los últimos meses de campaña, se financiaba principalmente con bonos de deuda política al igual que el resto de los partidos, gracias a su buena posición en las encuestas.

Después de la tregua navideña, el asunto arreció. Hasta la propia aspirante del PLN y actual presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se pronunció el 7 de enero públicamente, para pedir al TSE rigor con las cuentas de sus contrincantes libertarios (*La Nación*, 7 de enero del 2009).

Esto provocó la reacción del Movimiento Libertario, cuyo candidato, Otto Guevara, salió a desmentir “rumores” sobre financiamiento proveniente de Panamá o del presidente de ese país, Ricardo Martinelli, amigo de Guevara (*Diario Extra*, 8 de enero).

El político responsabilizó al PLN de difundir rumores mediante sus baterías telefónicas (personal dedicado a participar en programas de opinión), insinuaciones y redes sociales. Además, retó a Chinchilla a que ambos partidos abrieran sus cuentas.

Prestamista en la escena electoral

El martes 12 de enero, el diario *La Nación* publicó una entrevista a la empresaria, Carla Vanessa Gómez López, que prestó \$434.000 al candidato Otto Guevara, en enero del 2009, para que financiara su campaña electoral tempranera.

Gómez firmó escrituras con el Libertario, en las que aceptó hipotecas sobre propiedades de Guevara y cobró, a cambio, un 20% de interés en un plazo de un año.

En la entrevista, Gómez precisó pocos detalles sobre la operación financiera y dijo no recordar en qué forma entregó el dinero al político.

La mujer afirmó que se dedicaba a la construcción de obra gris, con oficina en su casa.

Ella sostuvo que prestó el dinero para ganar más recursos y que la relación con Guevara surgió a través del abogado Cristian Arguedas, entonces encargado de finanzas del Movimiento Libertario.

Alegó que el dinero provenía de su negocio de construcción y que era prestamista desde hacía cuatro años.

Adicionalmente, reconoció que la sociedad que usó para prestar el dinero no había tributado renta porque no había tenido utilidades y, a su vez, dijo que el dinero que prestó provino de ganancias de otras sociedades que sí tributaron.

“Voy a tributar y ahora más que nunca. Ya iba a tributar porque yo soy así, lo que pasa es que no se ha venido el dinero para tributar, me toca tributar hasta setiembre”, indicó.

La empresaria insistió en que el dinero era de ella. “Tan es así que está en una sociedad en la que está mi casa y la que figura es Carla Gómez”, dijo.

Al consultársele cómo entregó el dinero, respondió: “Ese cheque creo que era de gerencia, creo. Usted me está hablando de hace mucho tiempo”.

El periodista la comentó: “El PLN cuestionó que usted debe su casa teniendo tanto dinero como para prestar”.

Ella contestó: “Es mi estructura financiera. Lo que me está dando los huevos de oro lo dejo quieto y no lo toco y con mi trabajo pago mi casa, mi carro y mis tarjetas”, respondió.

El 13 de enero del 2010, el tesorero del Movimiento Libertario reaccionó con una publicación en el diario *La Nación* en la que argumentó que el PLN le cercó el sistema de financiamiento y reclamó que la prensa no cuestionara el origen de los recursos del PLN.

“Inician (el PLN) una campaña plagada de mentiras, gastando miles de millones de colones, afirmando, entre otros, que Otto Guevara cerraría la CCSS, campaña que fue desmentida luego de que don Longino Soto da la adhesión a don Otto”.

“No logran entender cómo una mujer pulseadora (esforzada) ha logrado, con el paso del tiempo, tener un capital que le permita hacer un negocio totalmente lícito”.

“Cuando no les queda más que tratar de pisotear la honorabilidad de una mujer y de un hombre, profesionales y jóvenes, quedan en entredicho todos los miles de millones que han gastado de banalidades orientadas a la juventud y a las mujeres. Y es ahí donde me pregunto: ¿Quién ha cuestionado a Laura esa cantidad de millones gastados? ¿Dónde andaban los periodistas de *La Nación*?”, escribió el dirigente libertario.

Arguedas dijo que fue él quien le propuso a Carla Gómez hacer el negocio financiero con garantía hipotecaria.

Argumentó, además, que recurrieron a esas formas de financiamiento porque el PLN les puso un cerco financiero en el que el Banco de Costa Rica (BCR) solo al PLN financiaba.

El préstamo con Gómez ocurrió casi un año antes de que el BCR entrara públicamente en la escena electoral.

En tanto el PLN dijo que denunciaría formalmente al Libertario ante el TSE para esclarecer el origen de los recursos de la campaña temprana (Diario Extra, 14 de enero).

Ese 14 de enero, *La Nación* tituló: “Guevara: ‘Los dineros que me prestaron son limpios’.

“Por las referencias que se me habían indicado, es plata que (Carla Gómez) tenía acumulada, que había vendido un spa muy prestigioso y le quedaron dineros de su familia, es una familia que aparentemente tiene recursos”, dijo el candidato al coincidir en que quien los contactó fue el encargado de finanzas del partido.

Guevara añadió que, con los recursos obtenidos, él le prestó el dinero al Movimiento Libertario y firmó un contrato de intermediación para pagar gastos del partido, con lo que luego recuperaría el dinero mediante la contribución estatal.

“Se autorizaba que Otto Guevara, de esa cuenta especial manejada por el tesorero Ronaldo Alfaro, se pagara todos los gastos del partido y que luego se me pagara de vuelta con bonos”, explicó el político, quien agregó que el Código Electoral no prohíbe esas transacciones.

Seis días después, *La Nación* informó de que el Movimiento Libertario se negó a revelar los recibos o cheques mediante los cuales Guevara recibió el dinero de los préstamos hipotecarios (*La Nación*, 20 de enero del 2010).

Se trataba de \$683.000 provenientes de prestamistas.

“En relación a la que fuera destacada como empresaria célebre por parte de *La Nación* en el año 2006, no daremos más información porque lo hemos hecho en forma abundante y ella no es candidata a ningún puesto público”, respondió el partido político al periódico.

A partir de ese momento, Guevara rompió relaciones con el diario *La Nación*.

Críticas a banco estatal

Mientras tanto, el debate público también tenía otro frente en el estatal Banco de Costa Rica (BCR).

El Partido Acción Ciudadana, el mayor de oposición, empezó a lanzar fuertes críticas sobre el BCR.

La agrupación de centroizquierda informó de que entregó casi \$3 millones en bonos al Banco de Costa Rica para obtener un crédito por \$2,3 millones, pero luego la entidad bancaria solo le otorgó \$1 millón al alegar que necesitaba guardar una mayor cantidad de bonos como garantía (*La Nación*, 21 de enero del 2010).

“Esto nos mete en una crisis financiera que afecta absolutamente todo el cierre de campaña”, dijo Francisco Molina, jefe de campaña del PAC (Diario Extra, 6 de enero).

La situación estaba relacionada con la intención de voto en favor del PAC en las encuestas, ante el avance del Libertario.

Otto Guevara también se quejó de que el BCR se negaba a financiar a su partido con el respaldo de sus bonos de serie B por \$2 millones a pesar de que él alegaba que, según las encuestas, obtendría votos suficientes para cubrir ese monto.

El BCR salió a pronunciarse públicamente sobre las razones por las que no otorgó créditos como lo pretendían varios partidos de oposición. Alegó que otorgó un trato similar a todos los partidos, con base en los criterios técnicos definidos para evaluar si un crédito es seguro para la institución.

Así reaccionó luego de que el PAC, el Libertario y el PUSC le achacaran una preferencia en beneficio del gobernante PLN (*La Nación*, 11 de enero), el cual logró obtener abundante crédito en el sistema bancario con sus bonos.

“Esto debilita la democracia”, dijo el entonces candidato del PAC, Ottón Solís, al tiempo que el aspirante socialcristiano, Luis Fishman, no tuvo reparos en decir que la actitud del BCR era una “persecución política” (*La Nación*, 11 de enero).

Medios electrónicos reaccionan

Antes de enero del 2010, los medios electrónicos habían tocado marginalmente el tema del financiamiento electoral y dejaron que los impresos llevaran la batuta en ese tema.

De acuerdo con los monitoreos de prensa archivados en el Tribunal Supremo de Elecciones, las radios y televisoras se habían dedicado más a cubrir asuntos organizativos y de eventuales decisiones de los candidatos en caso de resultar elegidos para gobernar.

No es que los medios impresos no vieran también esos asuntos, sino que se destacaron en el área del financiamiento.

Sin embargo, para el último mes de la campaña electoral, los medios electrónicos debieron reaccionar e hicieron eco de los hechos noticiosos en torno al dinero de campaña.

Esto permitió que el tema del dinero fuese ampliamente discutidos en espacios de opinión.

“Yo quisiera que tanto el Movimiento Libertario y Liberación Nacional expliquen de dónde están sacando ese dineral”, dijo Francisco Molina, jefe de campaña del PAC, en Radio Reloj el 5 de enero del 2010.

En el mismo medio, Otto Guevara alegó que si un partido tiene una intención de voto de un 30%, según las encuestas, tiene una expectativa de obtener \$10 millones en reintegro de gastos por parte del Estado.

La queja del PAC también fue publicada en medios televisivos como RTN de Canal 13.

Otro ejemplo: los cuestionamientos entre el PLN y el ML fueron discutidos en un debate en Radio Monumental el 15 de enero.

Carlos Ricardo Benavides, dirigente de Liberación Nacional, afirmó al aire: “Nos preguntamos quién es esa poderosa financista que puede darle a don Otto millones... y nos encontramos con que la señora no es una comerciante reconocida, que es maestra de profesión, que trabajó en la escuela Benjamín Herrera, en Escazú, que tuvo un par de tiendas o negocios, entre ellos un salón de belleza y un salón de tratamiento de las personas en materia de belleza”.

Humberto Arce, dirigente del Libertario, respondió que la empresaria había dicho, por medio de su abogado, cuál es el origen de sus fondos.

“Si alguien tiene prueba o elementos fundados vaya al Ministerio Público, la sección de Fraudes Económicos, vaya a Tributación Directa y denuncie evasión tributaria que ella haya cometido”, reclamó Arce.

El mismo día, Radio Reloj informaba: “Libertarios justifican capital de Carla Gómez. Desde hace diez años, se dedicó al comercio como ha sido una tradición en su familia. Ella pasó hace diez años con una pequeña herencia y empezó a ejercer el comercio”.

Cristian Arguedas agregó en ese medio: “La peluquería que trata de denigrar el PLN es el mejor spa de Costa Rica”.

Por su lado, la radio ADN informaba que el Tribunal Supremo de Elecciones investigaría las fuentes de financiamiento del Libertario y daba espacio a los tesoreros de los principales partidos, para debatir, el 18 de enero.

La ciudadanía además conoció de las advertencias que el TSE le hizo a 23 partidos políticos para que corrigieran aparentes faltas a las nuevas reglas vigentes sobre financiamiento” (*La Nación*, 15 de enero del 2010).

PAC fuera del ring

El 20 de enero, Informe 11 Las Noticias y otros medios como Extra TV 42, Monumental, Columbia, RTN y Reloj anunciaban: “Por falta de dinero, el PAC suspendió la propaganda del candidato Ottón Solís. Desde hoy, su publicidad desapareció de los medios de comunicación. El partido culpa al Banco de Costa Rica”.

Telenoticias de Canal 7 agregó: “La marioneta y el muñeco inflable (protagonistas de los anuncios del PAC) ya no van a aparecer más en televisión luego de que el PAC se quedara sin financiamiento”.

Según el partido, le faltaban al menos \$2 millones para el cierre de campaña.

En el diario La República, el jefe de campaña del partido tuvo espacio para decir: “Nos tienen secuestrados, esto es un atentado a la democracia. Nos están amordazando en el momento clave de la campaña electoral, esto es muy grave pero estamos acostumbrados a pelear contra capitales millonarios y contra las encuestas (La República, 21 de enero del 2010)”.

Según una encuesta publicada por ese mismo medio, el PAC estaba en tercer lugar en la intención de voto.

El BCR contestó que el dinero prestado es todo lo que permite el modelo definido para la campaña, basado en las encuestas (*La Nación*, 21 de enero del 2010).

El tema del PAC fue difundido ampliamente en todos los medios de comunicación.

En Radio Nacional, también el 21 de enero, el candidato Ottón Solís dijo: “Nosotros vamos a seguir haciendo la campaña con la gente, casa a casa, persona a persona”.

Al día siguiente, mientras el PAC pedía donativos a sus seguidores (Al Día, 22 de enero del 2010), Otto Guevara insistía en que las informaciones sobre su financiamiento eran un “juego de política sucia del PAC y el PLN” (Diario Extra, 22 de enero del 2010).

Además, el BCR anunció que devolvería al PAC bonos por \$600.000 si le daba a cambio otra garantía (*La Nación*, 22 de enero del 2010), pero la cúpula de Acción ciudadana dijo que las condiciones exigidas por el banco eran “inalcanzables” y volvía la mirada al bolsillo de los simpatizantes.

El PAC también la emprendió contra el Movimiento Libertario, al pedir al Ministerio Público investigar la procedencia del financiamiento del Libertario, lo que fue replicado en numerosos medios como Repretel, Red de las Américas, Radio Reloj, Radio América, Radio Monumental, Radio ADN, Radio Columbia y Radio Centro.

En tanto, el 26 de enero, Ottón Solís denunció que un panameño ofreció financiarle la campaña en una llamada recibida el 24 de enero (Radio Nacional, 26 de enero).

Mientras esto ocurría con el PAC, desde las tiendas del PUSC, trascendió que la familia del candidato presidencial, Luis Fishman, le prestó \$200.000 al partido para pagar gastos de campaña (*La Nación*, 20 de enero del 2010).

Evaluación pública de la reforma

Con las aguas del financiamiento un poco más calmas y a solo una semana de la elección nacional, el semanario *El Financiero* publicó, el 31 de enero, una entrevista en la que el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, fue categórico al decir que los bonos “introducen inequidad”.

El artículo comenzaba así: “El proceso que estrena nuevas reglas ya comienza a desnudar deficiencias conforme se aplica lo aprobado por el Congreso el año pasado. El tema más sensible hasta el momento ha sido el mecanismo de financiamiento con bonos”.

En opinión del presidente del TSE, el mecanismo resultó inapropiado porque no iba en una dirección de mayor equidad de procesos electorales.

“Los ticos no quieren que se sepa que son donantes. Es un reto para los partidos generar adhesión traducida en aportes... El mecanismo de bonos no es adecuado y

el Tribunal sugirió suprimirlo, los diputados se apegaron al viejo sistema de bonos y lo reinsertaron”, dijo el magistrado.

Días antes, el 21 de enero, *La Nación* había dicho en su editorial: “La ley dejó un portillo. La compra de bonos de la deuda política no puede ser considerada una donación porque el adquiriente tiene la expectativa, aunque sea remota, de recuperar lo invertido. En consecuencia, las corporaciones pueden abrir sus cofres a la inversión”.

El 27 de enero, Sobrado también dijo en *La Nación* que los bonos valen lo que las encuestas dicen. “Esto introduce un sesgo de inequidad en la competencia”, insistió.

Luego, La República publicó el 2 de febrero, un editorial en el que dijo que “la única manera de mantener a los extranjeros al margen de los procesos electorales sería eliminar la compraventa de los bonos de deuda política”. El mismo día publicó un reportaje titulado “Bonos distorsionan campaña”.

Varios meses después de la elección, el Diario Extra también editorializó: “Cuando el financiamiento político te pone a dudar. Lo que sí nos queda claro es que este nuevo mecanismo para el control de las finanzas de los partidos permite evaluar inversiones que en realidad solo se pagarían si se llega al poder (Diario Extra, 4 de agosto del 2010)”.

Finalmente, las elecciones del 7 de febrero fueron ganadas por Laura Chinchilla por un amplio margen. Ottón Solís quedó en segundo lugar y Otto Guevara, de tercero.

Un día después de las votaciones, el 9 de enero del 2010, Otto Guevara volvió a hablar con *La Nación* y lo hizo más distendido. A continuación, se transcribe un extracto de la entrevista debido a lo representativa que es.

¿Cuánto afectó el tema del financiamiento, en especial el caso de Carla Gómez, su prestamista?, le preguntó el periodista.

“El tema del financiamiento generó algunas dudas en la gente, como que la resfrió. Eso sumó, no se cuánto, para que, al final de cuentas, no creyéramos lo que estábamos proyectando crecer. Viéndolo retrospectivamente, hubiéramos presionado más a esta señora (la prestamista) que diera la información”.

¿Por qué no lo hizo?

“A mí me presentan una persona (Carla Gómez) para prestarme una plata. Tengo entendido que son recursos bien habidos. Pongo mi patrimonio a responder y viene

todo el tema de que si era plata de ella o de otra persona. Ahí se generó la discusión. No me competía a mí”.

¿Por qué, si el tema generó dudas, usted optó por no hablar con *La Nación*, antes de brindar una explicación satisfactoria?, le insistió el reportero a Guevara.

“Había una clara línea editorial en contra nuestra. Esa es una realidad objetiva. A eso se suma lo que consideramos es una extensión de esa línea editorial, haciéndole el juego a la campaña del oficialismo, metiendo más duda de la cuenta”.

Pero usted acaba de aceptar que sí había dudas..., dijo el periodista.

“Metiendo más duda de la cuenta. Si usted me dice: ‘¿De dónde saca plata José Luis Jop (otro de sus prestamistas)?, ¿de dónde saca plata Carla?’. Yo no sé. El tema no era conmigo, sino con los acreedores. *La Nación* estaba esperando de mí explicaciones que no son más”.

Pero, especialmente en política, es responsabilidad de quien pide prestado saber de dónde viene el dinero. ¿No lo cree así?

“Si yo voy adonde José Luis Jop a pedir plata, yo no le pregunto: ‘Mire, don José Luis, ¿usted está metido en lavado de plata o qué?’

OEA apuntó a financiamiento y cobertura posterior

También después de las elecciones, un informe de los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) coincidió con muchas de las críticas publicadas en campaña.

“Los cambios legales aplicados en el 2009 introdujeron avances que deben reconocerse: permitieron un mejor control del financiamiento privado, se abrió la posibilidad del adelanto de recursos, colaboró con la transparencia del sistema y se avanzó a partir del reconocimiento de los problemas experimentados en las dos elecciones previas”.

“Convendría explorar el establecimiento de topes a las contribuciones privadas, como sucede en la mayoría de los países, como un mecanismo que ayude a preservar aún más la independencia de los partidos frente a los intereses privados. El sistema de financiamiento público debiera revisarse a fin de que resulte más equitativo (Informe de la misión de observación electoral, OEA, 7 de febrero del 2010, Elecciones Generales República de Costa Rica)”.

Los medios no detuvieron la cobertura de las finanzas de los partidos después de los comicios, sino que continuaron al tanto durante la liquidación de la deuda política.

Por ejemplo, trascendió que un empresario de espectáculos musicales fue el mayor comprador de bonos de la campaña, al invertir más de \$1 millón en la campaña del Movimiento Libertario (*La Nación*, 18 de octubre del 2010).

Además, con el nuevo congreso en funciones, se conoció que diputados del PAC y del Libertario impulsaron mociones entregadas por un representante del banco BCT para reformar un proyecto de ley de supervisión bancaria (*La Nación*, 8 de noviembre del 2010).

En la campaña, dicha entidad bancaria financió a ambos partidos al recibirles \$2 millones en bonos políticos, a cada uno, para darles créditos.